PROBLEMAS JURIDICOS DERIVADOS DE LOS SISMOS CONSIDERACIONES EN EL DERECHO FAMILIAR *

Manuel F. Chávez Asencio

Los terremotos por sí no producen efectos jurídicos. Se requiere que afecten a las personas o a sus bienes. Es un hecho de la naturaleza que puede o no tener consecuencias jurídicas.

Los sismos tienen efecto en todos los ámbitos del Derecho. Me toca tratar sólo lo que afecta a la familia y al matrimonio, lo que desarrollaré en los siguientes temas:

- Ausencia y comprobación de muerte
- Divorcio
- Patrimonio de familia
- Adopción
- Sociedad conyugal
- Donación entre consortes
- El proceso familiar
- Pensión alimenticia
- Consecuencias de la muerte

AUSENCIA Y COMPROBACION DE MUERTE

El terremoto genera conflictos en la comprobación de la legal existencia de muchas personas físicas que desaparecieron, o respecto de las que no existe la seguridad o cierta certeza de que perecieron al derrumbarse un edificio.

Nuestro Código Civil nos presenta dos soluciones. Una de ellas se refiere a los ausentes o ignorados respecto a los cuales existe un procedimiento especial. El segundo caso se contempla en los artículos 123 y 124 del mismo Código.

Evidentemente no se trata de casos iguales. El legislador no puede fijar reglas diversas para situaciones semejantes; por lo tanto, se trata de situaciones distintas. En uno se trata de los ausentes o ignorados, respecto de

* Conferencia dictada el 29 de Noviembre de 1985 en la Universidad Iberoamericana

los cuales hay "incertidumbre" si viven o están muertos; en el segundo se trata del caso en que habiendo un cadáver es difícil de reconocer, y del caso en que no aparece el cadáver pero hay la certeza de que "la persona ha sucumbido en el lugar del desastre".

El primer supuesto lo regulan los artículos 640 C.C. y siguientes. Podemos decir que ausencia es la situación en que se encuentra una persona que ha abandonado el lugar de su residencia ordinaria, y que no habiendo constituido apoderado, se ignora el lugar en donde se haya y no se tiene noticias ciertas de su vida o de su muerte.

El sólo hecho de no encontrarse una persona en su domicilio no basta para que se le considere ausente desde el punto de vista jurídico. Es necesario que esta persona no hubiere designado representante y exista "incertidumbre" sobre su existencia o sobre su fallecimiento. Lo que caracteriza esta situación es el estado de "incertidumbre", que se va acentuando con el transcurso del tiempo.

Se trata de una de las acciones del estado civil. El Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 24, nos señala que las acciones del estado civil tienen por objeto cuestiones relativas, entre otras, a la ausencia. Agrega que las "decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de las acciones de estado civil perjudican aún a los que no litigaron".

Normalmente no se trata de un procedimiento que importe necesariamente la existencia de un pleito o de una controversia entre partes, pues la ausencia, a semejanza de la tutela, adopción, divorcio voluntario, reconocimiento de hijos, se tramita fuera de juicio, mediante jurisdicción voluntaria ante el Juez de lo Familiar.

En la actualidad es aplicable lo dispuesto por el artículo 705 C.C., en su segundo párrafo, que permite que se haga la declaración de presunción de muerte cuando hayan transcurrido dos años contados desde su desaparición, si hubo algunos de los acontecimientos previstos, dentro de los cuales está el terremoto.

La presencia de alguno de los acontecimientos que señala el artículo 705 C.C., no disculpa el trámite judicial. Por lo tanto, debe acudirse al juzgado para que se nombre un depositario de los bienes del ausente y se le cite en los términos que marca el 649 C.C.; de no comparecer, se le nombrará un representante. Lo que puede omitirse es el trámite de la declaración de ausencia; ésta se hace pasados dos años desde el día que hubiere sido nombrado el representante, pero como el artículo 750 C.C. nos permite la declaración de presunción de muerte transcurridos dos años desde su desaparición, al haber transcurrido dicho plazo, se hará la declaración de presunción de muerte, para lo cual no se necesita que proceda la declaración de ausencia (Art. 267 Fc. X).

Los efectos del proceso de ausencia son diversos, según el estado que guarde. Estos son los siguientes:

1. — En las medidas provisionales se dan los siguientes efectos:

1.a) Depósito.— La ley previene que se nombre un depositario para los bienes del ausente. El depositario tendrá las obligaciones y facultades de depositario judicial (Art. 652 C. C.). Se nombrará como depositario, en primer término, al cónyuge presente en ausencia del cónyuge a alguno de los hijos mayores de edad, fuere varios al más apto; al ascendiente más próximo en grado al ausente si no hubiere alguno de los citados; si faltan los anteriores, el juez nombrará al heredero presuntivo para tal efecto.

1.b) Representante.— Nombrado representante, éste será el administrador de los bienes con “las mismas obligaciones, facultades y restricciones que los tutores” (Art. 660 C.C.), pero a diferencia del depósito, si no hubiere cónyuge ni parientes, será representante el heredero presuntivo; si fueren varios, entre ellos se elegirá uno (Art. 659 C.C.).

1.c) Patria potestad.— Si el ausente estuviere ejerciendo la patria potestad, en su ausencia la ejercerá el otro progenitor que viva; si no lo hubiere, se llamará a los ascendientes paternos y maternos para que la ejerzan. Si no hubiere alguno de ellos, se nombrará tutor en los términos legales (Art. 651 C.C.).

2. — En la declaración de ausencia se dan los siguientes efectos:

2.a) Bienes del ausente.— Todos los que tengan sobre los bienes del ausente derechos que dependan de su muerte, entre ellos legatarios, los donatarios, etc., podrán ejercitarlos, dando la garantía que corresponda (Art. 689 C.C.).

2.b) Sucesión.— La ley previene que declarada la ausencia, si hubiere testamento público u ológrafo se presente ante el juez (Art. 679 C. C.). En caso de no haberlo, se abrirá la sucesión intestada. En ambos casos los herederos que tengan capacidad suficiente administrarán la parte que les corresponda y para todos los efectos serán puestos en posesión provisional mediante el otorgamiento de la garantía correspondiente (Art 681 C. C.). Los herederos que no administren podrán nombrar interventor (Art. 685 C. C.). Si muere el que está poseyendo provisionalmente algún bien, le sucederán sus herederos (Art. 696 C. C.).

2.c) Sociedad conyugal.— La sentencia que declare la presunción de ausencia de un ausente casado interrumpe la sociedad conyugal (Art. 698 C.C.). En este caso el cónyuge presente la administrará. La sociedad conyugal sólo se restaura cuando el ausente regrese o se probare su existencia (Art. 704 C.C.).

2.d) Divorcio.— La sola declaración de ausencia es causal de divorcio, en los términos del artículo 267 Fc. X.

- 2.e) Cónyuge.— El cónyuge presente recibirá los bienes que le correspondan hasta el día en que la declaración de ausencia haya causa de ejecutoria; de esos bienes podrá disponer libremente (Art. 700 C.C.).
Si el cónyuge presente no fuere heredero ni tuviere bienes propios, tendrá derecho a alimentos (Art. 703 C.C.).
- 2.f) Cesan las obligaciones de terceros.— Los que tengan con relación al ausente alguna obligación que deba cesar a la muerte de éste, podrán también suspender su cumplimiento bajo garantía. Se trata del caso, por ejemplo: de la pensión alimentaria que estuviere recibiendo el ausente, del usufructo vitalicio, etc. (Art. 690 C.C.).
- 3.— En la declaración de presunción de muerte los efectos son:
- 3.a) Bienes.— En relación a los bienes que tuvieran en administración los herederos, éstos cambiarán la posesión a definitiva sin garantía, y la que hubieren dado se cancelará (Art. 706 C.C.). Están facultados para vender y gravar los bienes (Art. 708 C. C.).
- 3.b) Representantes del ausente.— Los poseedores provisionales y definitivos, en sus respectivos casos, tienen la legítima procuración del ausente en juicio y fuera él (Art. 708 C.C.).
- 3.c) Sociedad conyugal.— La sentencia que declare la presunción de muerte de un ausente casado, pone término a la sociedad conyugal (Arts. 197 y 713 C.C.). Por lo tanto, se procederá a la liquidación de ésta, debiendo continuar el que viva con la administración del fondo social, pero con la intervención de los herederos que tuvieran la posesión definitiva de los bienes del ausente (Art. 205 C.C.).
- 3.d) Cónyuge.— El cónyuge presente que no fuere heredero ni tuviere bienes propios tendrá derecho a alimentos (Art. 714 C.C.).
- 3.e) Divorcio.— Para solucionar una situación incierta y permitir que el cónyuge presente pueda contraer nuevo matrimonio, se establece la causal prevista en la fracción X del artículo 167, que indica que procede el divorcio por la presunción de muerte en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que preceda la declaración de ausencia.

En relación al matrimonio religioso, existe también dentro del Derecho canónico un proceso sobre la muerte presunta del cónyuge, que contempla el canon 1707, que se tramita ante el Obispo y éste emitirá la declaración de muerte presunta.

Diversa es la situación prevista en los artículos 123 y 124 C.C. En estos casos, o bien existe el cadáver que no es fácil de reconocer por virtud del siniestro que puede ser: naufragio, incendio, etc.; o bien si no aparece el cadáver debe haber "certeza" de que la persona sucumbió en el lugar del desastre.

En ambos casos se requiere probar. En el primero, dando los datos que suministren los que recogieron el cadáver, que prácticamente son testigos y se expresará en cuanto fuera posible, las señas del mismo, de su vestido u objetos encontrados, etc. En el segundo, la testimonial de las personas que hayan conocido a la que no aparece y que les conste que sucumbió en el lugar del desastre.

DIVORCIO

La muerte de uno de los cónyuges pone fin al divorcio, así lo indica el artículo 290 C.C.

Sin embargo, esta afirmación sin importancia aparente, puede tenerla cuando el que muere es el cónyuge inocente. Supongamos que el inocente demanda el divorcio por una grave causal, y adicionalmente demanda la devolución de las donaciones hechas, los daños y perjuicio y el pago de la pensión alimentaria. Ocurre el terremoto del 19 de septiembre y el cónyuge inocente muere. Como consecuencia, el proceso de divorcio se termina y el culpable queda a salvo de la demanda instaurada en su contra, pues como ya no hay matrimonio, no puede condenársele a la devolución de las donaciones hechas, a los daños y perjuicios y pensión alimentaria. Es decir, el terremoto lo beneficia, no obstante ser el culpable.

Supongamos el caso contrario; es decir, que muera el culpable. También termina el divorcio y no podrá ya exigírsele a él ni a sus herederos (suponiendo que tuviere adicionalmente al matrimonio otros hijos) la devolución de las donaciones, indemnización, etc. pues el artículo 290 C.C. previene que "los herederos del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiere existido dicho juicio.

Habiendo sentencia los herederos cumplirán la sentencia de divorcio en lo relativo a los daños y perjuicios, y revocación de la donación, más no al pago de la pensión alimenticia.

PATRIMONIO DE FAMILIA

Aunque el artículo 741 C.C. no proviene que un siniestro puede extinguir el patrimonio de familia; para la debida interpretación hay que relacionarlo con el artículo 743 C.C. que dispone que la indemnización proveniente el pago del seguro a consecuencia del "siniestro" sufrido se debe depositar en una institución de crédito, a semejanza del pago de lo expropiado; relacionando ambos artículos vemos que un siniestro puede extinguir este patrimonio. En estos casos, debe exigirse al dueño de los bienes que formaron el patrimonio de la familia vuelva a constituirlo en un

año, so pena de que la cantidad depositada se entregue al referido dueño de los bienes, y ya no exista la posibilidad judicial de lograr la reconstitución del patrimonio.

DONACION ENTRE CONSORTES

Son interesantes los problemas que se pueden presentar en las donaciones entre consortes. En primer término, debemos tomar en cuenta la "especialidad" de las donaciones en Derecho de familia. A semejanza de la especialidad de las nulidades, lo que ha sido reconocido por la doctrina, debemos también señalar la especialidad de las donaciones antenuptiales y entre consortes.

Lo básico para entender la especialidad de las donaciones, es que encontramos una doble reglamentación en nuestro Código Civil. Por un lado la donación común está reglamentada en el título cuarto, capítulo uno, del libro cuarto, que en su segunda parte trata de "Las diversas especies de contratos". Por otro lado se reglamentan las donaciones antenuptiales y entre consortes, en los capítulos siete y ocho, del libro primero, del título quinto, que trata del matrimonio. Se señala también como especial, que estas donaciones no requieren la aceptación expresa del donatario. Se admite una capacidad especial, pues donante y donatario pueden tener menos de dieciocho años, pero mayores de catorce y dieciseis y requieren, en ese caso, el consentimiento de los que ejercen la patria potestad o de los tutores. También como característica muy especial está la revocabilidad. En el aspecto fiscal, están exentas de impuesto. Entre consortes no hay límite en las donaciones.

El problema se presenta en caso de que la donación fuera revocada. El Código Civil en su actual redacción nos dice que "las donaciones entre consortes pueden ser revocadas por los donantes, mientras subsista el matrimonio, cuando exista causa justificada para ello a juicio del juez" (Art. 233 C.C.).

Para decir quien pierde la cosa, debemos preguntarnos si en estas especiales donaciones se trasmite la propiedad al momento de perfeccionarse el contrato. No hay duda en las donaciones comunes, por la naturaleza irrevocable de éstas. Sin embargo, la interrogante surge en relación a las antenuptiales y entre consortes.

El poder revocar el donante la donación hecha no impide que la transferencia de propiedad se haga. No puede sostenerse que exista una condición suspensiva, consistente en la terminación del matrimonio o que pueda haber una nulidad de por medio, pues existen otras posibilidades de revocación cuando se justifiquen ante el juez y el donatario estará obliga-

do a devolver la cosa; si no la tiene, debe pagar su precio, pero deben seguirse las reglas de la donación común en el sentido de que el donatario hace suyos los frutos de los bienes donados, hasta el día en que se notifique la revocación.

Pero si la cosa donada perece, no hay ya posibilidad de revocación porque hay una imposibilidad jurídica, pues lo que ya no existe en el comercio no puede ser materia del acto jurídico; la relación jurídica entre donante y donatario carece de objeto. Pero si la cosa hubiere estado asegurada y el donatario hubiere recibido el importe del mismo, deberá entregar al donante el valor de seguro. Si no hay seguro, perdida la cosa la relación jurídica no existe como posible, puesto que el objeto de la donación se perdió y no hay posibilidad de revocar.

Adicionalmente debemos tomar en cuenta que la donación se confirma con la terminación del matrimonio y debe tomarse en cuenta que la revocación no podrá hacerse después de la muerte del donante o del donatario. Si el donante muere, no habrá quien revoque pues es un derecho personal, estimo no transmisible, independientemente de que ya no subsista el matrimonio. Si la donataria muere antes que el donador, pero después de efectuada la donación, independientemente de que ya no está "subsistente" el matrimonio, es necesario tomar en cuenta que la donataria al morir perdió la capacidad de goce y el bien materia del contrato se transmitió por herencia a sus sucesores.

EL PROCESO EN LO FAMILIAR

En materia familiar tenemos que distinguir en lo procesal dos aspectos. Uno se refiere a los "términos", y el artículo 131 C.P.C. nos dice que "en ningún término se contarán los días en que no pueda tener lugar actuaciones judiciales". Significa que en el caso del terremoto del 19 de septiembre, independientemente de que se hubiere publicado el acuerdo del Tribunal Superior interrumpiendo los términos, por la destrucción del edificio no pudieron tener lugar actuaciones judiciales en el lugar destinado para ello.

Esto nos lleva a señalar lo que es el Tribunal. Esta palabra tiene dos acepciones: a) Lugar donde se administra la justicia; b) La institución pública integrada por los jueces, magistrados, funcionarios y auxiliares y empleados que como órgano del Estado tiene la función de administrar la justicia. Es cierto que lo fundamental del tribunal es ser órgano de administración de justicia, independientemente del lugar en donde se encuentre. Sin embargo, la administración de justicia requiere un lugar físico para que los integrantes del tribunal se reúnan, y que ese lugar sea conocido por

los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, pudieron haberse fijado lugares aislados para que los tribunales se reunieran a impartir justicia. De no haberse hecho así, los términos no cuentan.

Otro aspecto se presenta en el relativo a las "actuaciones judiciales", de las cuales el artículo 64 nos dice que se practicarán en días y horas hábiles, y que éstos son todos los días del año, excepto los sábados y domingos y aquellos que las leyes declaren festivos. Adicionalmente el mismo artículo señala que por horas hábiles se entienden las que medien entre las siete hasta las deícinueve horas, pero inmediatamente después agrega que en los "juicios sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, interdictos posesorios, diferencias domésticas y los demás que determinen las leyes, no hay días ni horas inhábiles".

Parece claro que los "términos" judiciales se interrumpieron, tanto en los procesos civiles como en los familiares y de arrendamiento inmobiliario. Pero no está tan claro que el tribunal familiar debe abstenerse de conocer problemas sobre alimentos o diferencias domésticas. En estos casos, debido a las situaciones especiales de urgencia que se pueden presentar y al hecho de que "todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad" (Art. 940 C.P.C.) en caso de ser solicitado el tribunal familiar debe integrarse, aún el domicilio del juez, quien debe solicitar la comparecencia de su secretario para los efectos de dar fe o certificar el acto realizado en los términos del artículo 58 C. P.C.

Es decir, salvo la aclaración de que en materia familiar "no hay días ni horas inhábiles" se deben reunir todos los demás requisitos para que las actuaciones sean válidas.

PENSION ALIMENTICIA

Acontecimientos como los padecidos el 19 y 20 de septiembre pasado, pueden originar modificaciones en el patrimonio de las personas afectadas. Y esto repercute en el área familiar, tanto en la vida normal de un matrimonio y su familia, como en las anormales cuando se dan los casos de separación, divorcio o nulidad de matrimonio.

La regla para cuantificar la pensión alimenticia la encontramos en el artículo 311 C. C. que dice: "Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos". Evidentemente el terremoto puede haber afectado el equilibrio que se buscó en la pensión alimenticia antes del sismo.

Pueden haber casos en los que el deudor alimentario se encuentre en una situación diversa al haberse reducido su patrimonio; en términos

generales podría decirse que en la medida en que sufrió la reducción tiene derecho a solicitar una modificación de la pensión que estaba dando. Pero en esto hay que tener cuidado. La pensión pudo haberse fijado en relación al sueldo que percibía; si sigue trabajando y percibiendo el sueldo, el hecho de que hubiere perdido algunos bienes no impide que el importe de la pensión continúe igual. Sin embargo, si ésta se fijó en relación al patrimonio total del deudor, al reducirse éste, tiene derecho a buscar también una reducción. Por lo tanto, el caso concreto será el que determine la solución adecuada.

Por otro lado, el o los acreedores alimenticios tienen derecho a buscar un incremento, en caso de que hubieren sufrido pérdidas en bienes o afectarseles su integridad física. Por ejemplo: que se ameritará el cuidado médico u hospitalario, o quedará imposibilitado para trabajar, en cuyo caso podrá incrementarse la pensión.

Debemos tomar en cuenta que la pensión alimentaria es divisible, en el sentido de que la pensión puede satisfacer por varios obligados a la vez (Art. 712 C. C.), lo que da la posibilidad de reducir la obligación de uno e incrementar, o adicionar, la obligación de los que no estuvieren aportando. Sobre este particular estimo que la pensión a cargo de los progenitores no puede dividirse para permitir que participen otros parientes. Se busca que el acreedor alimentario guarde proporción con la vida a que está acostumbrado, y este "standar" lo dá la posibilidad económica de los padres. En cambio si puede dividirse en los otros casos por ejemplo: todos los hijos deben alimentos a uno, o a ambos padres.

Existen multitudes de casos que ameritarán soluciones concretas. Podría darse el caso, no teórico del todo, que se hubiere garantizado la pensión alimenticia con algún inmueble, por ejemplo: un departamento en condominio, cuya renta fuera suficiente para satisfacer las necesidades elementarias de la familia de una persona en particular. ¿Qué pasa si el inmueble se destruyó como consecuencia del sismo?. ¿Tiene obligación el deudor alimentario de reconstruir ese patrimonio?. ¿Queda liberado al haber asegurado ya la pensión anteriormente?.

Como la pensión alimentaria es imprescriptible y dura todo el tiempo que se necesite, la obligación persiste y el asegurar una pensión no debe confundirse con la obligación misma.

El terremoto puede acarrear la necesidad de demandar la pensión alimenticia por quien antes no se necesitaba. Por ejemplo: alguien menor de edad que pierde sus padres, deberá acudir en solicitud a los abuelos y colaterales hasta el cuarto grado. En relación a personas mayores de edad éstos requerirán de la pensión, cuando hubieren perdido su patrimonio y estuvieren imposibilitados para trabajar.

SOCIEDAD CONYUGAL

El terremoto pudo haber destruido algún bien, mueble o inmueble, perteneciente a la sociedad conyugal. Conviene aclarar que sucede y a cargo de quien es la pérdida, tomando en cuenta que ambos consortes son los que integran esa sociedad.

En primer término conviene destacar que en el Distrito Federal la sociedad conyugal no tiene personalidad jurídica. En algunos Códigos Civiles de los estados actualmente se reconoce personalidad jurídica a la sociedad conyugal. Entre otros cabe citar al de Tlaxcala, donde el artículo 70 previene que la "sociedad conyugal es una persona jurídica cuya capacidad nace desde el momento de haberse celebrado el matrimonio".

Si la sociedad conyugal no tiene personalidad jurídica, significa que los bienes que se aportan a ella pertenecen en propiedad a cada uno de los consortes o a ambos en copropiedad. Es decir, son bienes de ella, de él o de ambos en copropiedad. No pueden transmitirse a la sociedad conyugal porque no tiene personalidad jurídica y no tiene, consecuentemente, capacidad para adquirir. La sociedad conyugal no significa tampoco, necesariamente, que se transmitan entre sí los contrayentes todos sus bienes. Todo esto significa que ambos conservan la propiedad de los muebles e inmuebles que se aportan.

Pero, ¿qué significa la sociedad conyugal?. Los autores de Derecho la comparan con la sociedad sin personalidad, con la copropiedad, otros con la comunidad y Rogina Villegas llega a afirmar que es una sociedad con personalidad jurídica. Para dilucidar esta incognita brevemente hará algunas consideraciones.

Nuestro Código Civil al tratar de este régimen, adicionalmente de llamarlo sociedad conyugal, nos remite a las disposiciones relativas al contrato de sociedad y no a la copropiedad, para resolver todo lo relativo a las situaciones no pactadas por los esposos al constituirlo o aquello que pactado fuera confuso. Los cónyuges reciben el nombre de "consocios", pues así los califica el artículo 188 en su fracción I; en sus otras fracciones los llaman socios, al referirse al administrador. Esto nos hace reflexionar que la naturaleza que le corresponde a esta sociedad conyugal es de una sociedad sin personalidad, donde los cónyuges se "obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial" (Art. 2688 C.C.).

Sin embargo, al preguntarnos que objeto tiene la sociedad conyugal y para qué se constituye, evidentemente debemos responder que tiene un contenido económico, que se refiere a los bienes y derechos patrimonia-

les—económicos de los cónyuges. Es una consecuencia o efecto del matrimonio, el que se considera como una comunidad de vida y, por lo tanto, debe también participar del concepto de “comunidad”.

Creo que puede señalarse que el objeto de la sociedad es formar o constituir un patrimonio. Dentro del objeto de los contratos está el crear derechos y obligaciones (Arts. 1792 y 1793 C.C.), e indirectamente la cosa misma; a la sociedad conyugal se aportan, en forma no traslativa de dominio, los bienes y derechos de los consortes. Se trata de un contrato derivado del matrimonio con relación a los bienes. “El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes” (Art. 178 C.C.). En la sociedad conyugal, los cónyuges combinan sus esfuerzos y bienes para la realización de un fin común, predominantemente económico que está íntimamente unido con los del matrimonio. El esfuerzo común se orienta al fin o fines de esta especial sociedad, pero todo esfuerzo o trabajo requiere dinero y de bienes, y éstos constituyen el patrimonio por aportación, que en estas sociedades es común. Es decir, la sociedad constituye a los cónyuges en “consocios” en lo económico para constituir y tener un patrimonio. Ahora bien, el patrimonio se compone de bienes y derechos de toda clase, que conservan los cónyuges como propios cada uno o ambos en copropiedad, los cuales aportan sin transmitir el dominio, porque la sociedad conyugal no es sujeto de derechos y obligaciones; no tiene la personalidad jurídica para adquirir. Además, se compone del “fondo social” que se constituye con las utilidades o ganancias de los bienes y derechos. En relación a los bienes y derechos los cónyuges son “coparticipes”, es decir, participan de los bienes que mutuamente aportaron y en relación al “fondo común” (gananciales) hay “comunidad” entre ambos. Por aportarse bienes y derechos de los cónyuges a ésta especial sociedad, esos bienes y derechos y el “fondo social” responden frente a terceros por las cargas y deudas sociales.

Al aportarse los bienes a la sociedad conyugal, éstos seguirán a nombre el que los aporta, pero ambos usan y disfrutan en común de los bienes aportados.

El que no es propietario se limita al uso y disfrute. Sin embargo, una vez aportados los bienes, éstos producen rentas, utilidades, intereses, etc., que van formando el “fondo social”. En relación a este “fondo social” hay una comunidad entre ambos; si no pactaron cosa distinta en las capitulaciones matrimoniales, ambos participan en el 50o/o. Es decir, en la sociedad conyugal hay diversos bienes: bienes que pertenecen a cada uno de los consortes individualmente o en copropiedad, y aquellos otros que constituyen el “fondo social” que pertenecen en comunidad a ambos.

Es decir, participan como “consocios” en el uso y disfrute de los bienes que cada consorte tiene en propiedad, que en caso de liquidación les son devueltos, pero en el fondo social participan en “comunidad”. Puede señalarse que sólo los bienes de ella y de él que se aportaron al constituir la sociedad conyugal permanecen siendo de cada uno de los consortes o de ambos si lo aportaron los dos en copropiedad. A partir de ese momento, todos los bienes, dinero y derechos que se obtengan, por ser producto de los bienes aportados o por ser producto del trabajo de los consortes forman parte del “fondo social” del que participan ambos en comunidad. No participarán en la comunidad de los bienes que cada uno reciba individualmente por herencia, legado o donación, los que, aportándose a la sociedad, pertenecerán al dueño y el otro tendrá el uso y disfrute.

Con base en lo anterior, podemos destacar que hay varias hipótesis en relación al bien que perece. Si se trata de bienes que se aportaron al constituirse la sociedad conyugal, evidentemente éste o éstos bienes perecerán para el cónyuge dueño y el “consocio” ya no tendrá el uso y disfrute del mismo. Pero si el o los bienes que se destruyen son los del “fondo social”, entonces perecerá el bien o los bienes para ambos consortes en la proporción que hubieren convenido, y si no lo hubieren hecho en el 50o/o.

Lo anterior también tiene interés en relación a los acreedores de los consortes o de la sociedad conyugal. En caso de que se hubiere constituido una garantía real sobre alguno de los bienes, tiene derecho a que se mejore la hipoteca, en caso de ser insuficiente, y en caso de destrucción subsistirá la hipoteca en los restos de la finca, y el valor del seguro quedará afecto al pago (Arts. 2908 y 2910 C.C.). Pero la exigencia sólo puede hacerse en relación a los bienes del consorte que fuera el deudor, o en bienes del “fondo social” si la sociedad fuera la deudora.

ADOPCION

Con motivo de los acontecimientos habidos en la ciudad de México muchos se preguntaron la conveniencia de modificar la adopción, para hacer fácil que mucha gente pudiera adoptar a los huérfanos del terremoto, sin las exigencias y trámites que previene la actual legislación.

Sobre el particular, independientemente que estimo es necesaria una revisión a fondo de la institución de la adopción e incorporar la adopción plena, no es conveniente generalizar sobre la necesidad de modificaciones por circunstancias especiales, sin antes analizar si nuestra legislación permite solucionar las situaciones que se dan.

Se pretendía que de inmediato aquellas personas o matrimonios que lo acreditaran pudieran tener al adoptado, y evitar que éste padeciera en las instituciones oficiales hasta que después del trámite largo, administrativo y judicial, se pudiera lograr la adopción, dejando en los menores huellas inevitables.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en estos casos se trata de menores respecto de los cuales no se conoce a sus parientes. Es decir, se presupone que los que ejercen la patria potestad han muerto y habrá que aplicar el artículo 444 que en la fracción VI, que previene los casos de exposición de los menores por el padre o la madre, “o porque los dejen abandonados por más de seis meses”. En estos casos, la adopción no puede concretarse sino pasados los seis meses.

En caso de que no hubieren transcurrido los seis meses del “abandono”, puede decretarse el depósito del menor con el presunto adoptante, según lo previene el artículo 923 C.P.C. en tanto se consuma dicho plazo. Después se hará el trámite de la adopción, conforme lo marca el propio Código de Procedimientos Civiles y fundado en el Código Civil.

Querer modificar la ley para atender circunstancias especiales no es recomendable. La adopción es delicada, pues debe hacerse la investigación exhaustiva de los presuntos adoptantes, para evitar la explotación de menores.

CONSECUENCIAS DE LA MUERTE

La muerte esta contemplada en diversos preceptos en el Derecho familiar y sus consecuencias son importantes. Las principales son las siguientes:

- a) Relaciones parentales.— Las relaciones parentales de consanguinidad y adopción terminan por la muerte de cualquiera de los parientes.
- b) Sucesión.— Con la muerte se abre la sucesión, bien sea testamentaria o intestada. El derecho de heredar, por virtud del parentesco consanguíneo, es transmisible hereditariamente en casos de intestado para herencia por estirpe (Art. 1609 C.C.).
- c) Afinidad.— El parentesco por afinidad se conserva, pues el impedimento para contraer matrimonio (por afinidad) permanece en línea recta y debe continuar. Este impedimento sólo se da en caso de muerte de uno de los consortes, divorcio o nulidad del vínculo. Durante la vida de los cónyuges sería bigamia, el hecho de que uno se casara con un tercero siguiendo existente el vínculo.
- d) Adopción.— En la adopción, como sólo se crean por este parentesco derechos y obligaciones entre el adoptante y el adoptado (Art. 412 C.C.),

es evidente que la muerte de cualquiera de ellos extingue el vínculo respectivo.

- e) Matrimonio.— La muerte de alguno de los cónyuges extingue el vínculo conyugal con todas las consecuencias inherentes a tal situación.
- e.1) Relaciones personales y patrimoniales económicas.— En lo relativo a las relaciones conyugales entre cónyuges no existe problema alguno. En cuanto a lo económico, origina la necesidad de la liquidación de la sociedad conyugal, si bajo dicho régimen se celebró el matrimonio. El cónyuge que sobreviva continuará en posesión y administración del fondo social, con la intervención de representante de la sucesión del otro cónyuge, hasta que se verifique la partición (Art. 205 C.C.).
- e.2) Donaciones.— En materia de donaciones entre consortes, la muerte del cónyuge donante origina como consecuencia importante el que se transforme en irrevocable la donación. El artículo 233 reconoce el principio general de que las donaciones entre consortes pueden ser revocadas en todo tiempo por el cónyuge donante mientras “subsista” el matrimonio o cuando exista causa justificada a juicio del juez. Por virtud de la muerte ya no subsiste el matrimonio y las donaciones quedan irrevocables.
- f) Patria potestad.— El artículo 443 nos dice “que la patria potestad se acaba con la muerte del que la ejerce”. Es necesario señalar que la patria potestad como institución no se extingue si hay otra persona en quien recaiga, que puede ser el otro cónyuge o los ascendientes, que pueden ser los abuelos paternos o maternos. Al faltar éstos, la patria potestad se extingue, dando paso a la tutela.
- g) Tutela.— En lo relativo a la tutela, como institución ésta no se extingue por la muerte del tutor, toda vez que se procede a la designación de un nuevo tutor.

Los sucesos comentados, nos dan la oportunidad, no sólo para resaltar los efectos negativos de la muerte, desaparición de personas y pérdida de bienes y derechos, sino también para señalar lo positivo. Fue evidente la respuesta de los habitantes de esta ciudad—capital. Ninguno fue indiferente a lo ocurrido; todos, en alguna forma, participamos para remediar o aminorar los daños en personas y bienes.

La solidaridad humana fue magnífica. Se dió sin haberla requerido autoridad alguna. Fue espontánea, producto de la calidad humana de los mexicanos.

El Derecho también debe responder a esto. Tomar en cuenta esta calidad humana y esta solidaridad que son la base de las relaciones interpersonales que también son relaciones jurídicas y reforzar las instituciones sociales, familiares y conyugales, pues está como necesario lograr

y fortalecer la solidaridad social, la solidaridad familiar y la solidaridad doméstica, fundadas en la libertad, igualdad en la dignidad y derechos y el respeto entre todos.